

SITUACIÓN POLÍTICA. LA LARGA ESPERA

Nelson Manrique

Profesor del Departamento de Ciencias Sociales PUCP

1. Campaña cold, Palacio hot

A menos de un año de las elecciones generales de marzo de 2006, no termina de despegar la campaña electoral. Hay, a la fecha, 33 organizaciones políticas inscritas, la mayoría de ellas desconocidas, por lo general animadas por candidatos ilusionados con la perspectiva de repetir las performances de los *outsiders* que llegaron al poder a partir de los noventa. El tibio respaldo que reciben las organizaciones más asentadas, que oscilan estacionalmente entre el 10 y el 20 por ciento, alimenta las esperanzas de quienes creen que basta con declararse un independiente para convertirse en el Mesías esperado.

A otro nivel, prosigue la cotidiana sucesión de escándalos palaciegos. El más reciente ha sido la conmutación de la pena de cárcel que ha otorgado el presidente Toledo a la hija del embajador israelí en Londres, sentenciada por narcotráfico. El caso vuelve a poner sobre la mesa algunos de los peores vicios que han caracterizado al régimen. En primer lugar, el uso del poder delegado por los ciudadanos para defender causas más que cuestionables. Aunque parlamentarios oficialistas han presentado una lacrimosa versión de la situación, según la cual la muchacha indultada por Toledo sería una infeliz criatura que cometió un desliz del cual se arrepiente y por el cual ya fue suficientemente castigada, el tema de fondo es que muchos otras muchachas, de origen peruano, que no tienen los contactos de la hija del embajador israelí purgan condenas bastante mayores que la que se dio a Lee Heifetz. En muchos casos, sus delitos son menores que el intento de pasar cuatro kilos de cocaína por la aduana. Pero, en tanto no tienen patrocinadores poderosos, sus culpas se miden con otra vara. Es imposible construir una institucionalidad democrática si desde las más elevadas instancias de poder se muestra, una y otra vez, que es falso que la ley sea para todos y que todos tenemos iguales derechos y responsabilidades. Cualquier historia que se cuente sobre la decisión del gobierno de combatir el narcotráfico, “caiga quien caiga”, queda así desprovista de toda credibilidad. Se refuerza el sentimiento de que es cosa de estúpidos obedecer las leyes. Con semejantes antivaleores, predicados con el ejemplo por quienes deberían hacer cumplir las leyes, es imposible una coexistencia ajustada a normas y reglas.

Este incidente se suma al provocado por la decisión presidencial, durante la gira a Oriente, de no realizar

una reunión previamente concertada con el presidente palestino. Las explicaciones dadas, atribuyendo el hecho a una simple “descoordinación” en las agendas de los mandatarios, no han logrado borrar la impresión de que en este desaire ha jugado un papel importante la influencia de la Primera Dama y los amigos judíos del entorno presidencial. Se repite el problema del manejo del poder por Alejandro Toledo en función de sus intereses particulares, a costa de los intereses nacionales.

Aunque los favores otorgados a la teniente Lady Bardales siguen captando cierta atención, hasta los chismes, cuando se abusa de ellos, terminan cansando. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la atención pública se centre en los temas políticos de fondo. La conversión de la política en un espectáculo es un fenómeno universal que acompaña a estos tiempos posmodernos. La indignación por el mal uso de los recursos públicos, así como el uso de la institución presidencial para otorgar privilegios a los favoritos, termina, empero, morigerada por la extensión la corrupción. Alimenta el ambiente de escepticismo ciudadano el hecho de que no se reconoce pergaminos convincentes a ninguna organización política para erigirse en la campeona de la moralización. Este es sin duda un juicio injusto, por lo estereotipado, pues pone en el mismo saco a santos y pecadores, pero muestra que los (pocos) políticos probos han sido incapaces de marcar otra dinámica en estos tiempos de los que juran por Dios y por la plata.

2. Crece la protesta social

A medida que se acerca el final del régimen, crece la protesta social, especialmente en el interior, donde las comunidades afectadas por la minería han atraído la atención pública. Los gremios empresariales y cierta prensa han hablado inmediatamente de ataque a las inversión privada y sabotaje al país. Pero es inevitable ver que se aplica nuevamente distintos raseros de medida cuando se compara la permisividad frente a abusos tan flagrantes como los que cometen las empresas mineras que envenenan las aguas que bebe Lima, al mismo tiempo que se busca deslegitimar a Sedapal para convencer a la opinión pública de privatizar el agua potable.

El objetivo general de las movilizaciones que se vienen produciendo no es derribar al gobierno, pues se mantie-

ne el consenso de dejar que Alejandro Toledo complete su mandato, porque se considera que el costo de una interrupción del proceso democrático sería más elevado que las eventuales ganancias que dejaría precipitar la crisis. La situación boliviana y los conflictos que hacen similarmente inestable la situación política en el Ecuador, abonan a favor de una actitud cautelosa. Las movilizaciones están más bien orientadas a presionar para conseguir más recursos económicos en un año electoral. Los sectores sociales movilizados evalúan correctamente que este es un buen momento para presionar por sus reivindicaciones. El propio Gobierno ha alimentado esta dinámica, pues la experiencia de los cuatro años precedentes ha dejado la lección de que el régimen sólo entiende el lenguaje de la presión. Por otra parte, es evidente el deseo de Toledo de gastar recursos fiscales para ganar algo del apoyo electoral que buena falta le hace. Las disquisiciones en torno al porvenir político del ministro Pedro Pablo Kuczynski, cuyo final provisional ha sido el lanzamiento de su candidatura a la presidencia del BID, han dejado en claro la voluntad gubernamental de hacer gasto social para obtener votos. Por otra parte, han dejado igualmente claro que Kuczynski no cuenta con el apoyo de los cuadros de Perú Posible como su candidato. Las encuestas pueden mostrar que él podría ganar alguna votación, pero los militantes de la chakana no están dispuestos a hacer sitio en las listas a los advenedizos, aun si estos tienen más popularidad que los alicaídos cuadros peruposibilistas.

3. Preocupación por la crisis de Bolivia

La agudización de la crisis política boliviana, ha vuelto a poner sobre el tapete el tema de los conflictos étnicos y raciales y la amenaza que estos representan para la viabilidad de un régimen democrático estable. El novelista Alfredo Bryce ha hecho una invocación a prestar atención a los riesgos que supone la persistencia del racismo en el Perú. Bryce tiene razón al llamar la atención sobre un problema neurálgico. Suele olvidarse el enorme peso de la discriminación étnica y racial en la violencia política que abatió al país en las dos últimas décadas del siglo veinte. Aunque el derrotero histórico particular del Perú no ha dado lugar a movimientos indianistas fuertes como los que existen en Bolivia y Ecuador, los problemas de discriminación económica y social y de exclusión política son semejantes en toda el área andina. No es posible forjar un orden democrático consistente si no se supera el imaginario oligárquico que pretende construir una “democracia” con ciudadanos de primera y de segunda. La democracia es necesaria para que podamos procesar nuestras diferencias pacífica y creativamente. No supone que todos somos iguales. Es más bien el reconocimiento

de que somos diferentes lo que exige construir un espacio de igualdad formal (al que llamamos ciudadanía) para poder procesar en él nuestras diferencias. La condición para que este orden funcione es el reconocimiento de una básica condición, humana, que nos hace semejantes. Esta es negada por el racismo.

4. Una guerra de guerrillas burocrática

En el panorama actual no parece posible que alguna organización gane las próximas elecciones por *knock out*. En esas circunstancias, partidos como el APRA tratan de asegurar un final favorable por puntos, intentando controlar las instituciones que permitan maniobrar para ganar fuera de las urnas. En esta guerra de escaramuzas el APRA es ducha, pero quien pierde es la democracia, como lo ha mostrado el defenestramiento de Fernando Tuesta de la dirección de la ONPE, que ha puesto en crisis a una de las pocas instituciones que funcionaban bien y gozaban de una sólida credibilidad. Pero aún más grave es el descrédito de instituciones como el Consejo Nacional de la Magistratura, de la que depende el nombramiento de los jueces del país y la credibilidad de todo el sistema de justicia. El papel del aprista Jorge Lozada Stámbury ha mostrado los costos de esta política miope, que, atendiendo a la defensa de intereses de partido, agrava seriamente la crisis de la democracia peruana.

El resultado es el agravamiento de la crisis de la institucionalidad democrática. Si Fujimori mantenía a los jueces en condición de provisionales como una manera de asegurar su incondicionalidad, la prolongación de la acefalía de la Defensoría del Pueblo, atando la solución del problema a que se favorezca el nombramiento de otro aprista en el Tribunal Constitucional, favorecen la deslegitimación de todo el orden constitucional. Se fortalece, de esta manera, ese sentido común que ve a la “mano dura” como la única vía posible para superar la crisis.

Queda pendiente, igualmente, que el parlamento discuta el proyecto de ley de reparaciones a las víctimas de la violencia política. La representación aprista ha bloqueado el tema, exigiendo que se cambie la fórmula “víctimas de la violencia política” por “víctimas del terrorismo”. Siendo comprensibles las aprensiones del partido aprista, cuando la responsabilidad penal de Alan García en las masacres cometidas durante su gobierno está nuevamente puesta sobre el tapete, es lamentable que un tema fundamental de justicia sea postergado de esta manera.

Mientras tanto, se sigue esperando la discusión de la agenda para solucionar los problemas pendientes del país. ■